

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Tuluá Valle, Octubre 29 de 2.015.

Señor es:

JUECES CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS (REPARTO).

Buga Valle.

REF: DEMANDA EN ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA.
DTE: CARLOS ARTURO, DEIBY, RUBY, JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS, CATALINA SOLIS CASTRO, NELCY RAMÍREZ CARDONA Y EL MENOR CARLOS MANUEL GRUESO RAMIREZ.
DDO: LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL.

DAYRO PÉREZ BETANCURT, mayor de edad vecino del Municipio de Tuluá Valle, identificado con la C.C.No. 16.352.267 de Tuluá Valle, Abogado Titulado y en Ejercicio con T.P.No. 66.386 del C.S.J., obrando en nombre y representación de los señores **CARLOS ARTURO, DEIBY, RUBY, JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS, CATALINA SOLIS CASTRO, NELCY RAMÍREZ CARDONA Y CARLOS MANUEL GRUESO RAMÍREZ**, todos mayores de edad, a excepción del ultimo, quien es menor y en el caso de este, se actúa con fundamento en el poder conferido por sus progenitores los señores **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS Y NELCY RAMÍREZ CARDONA**, vecinos los tres primeros, Las dos últimas y el menor del Municipio de Tuluá Valle, El cuarto residente en España, identificados con las C.C.Nros. 1.112.299.385 de Tuluá Valle, 14.800.438 de Tuluá Valle, 1.116.232.177 de Tuluá Valle, 49.737.563 de Tuluá Valle, 31.198.547 de Tuluá Valle y 1.116.258.202 de Tuluá Valle, obrando El primero en su propio nombre y en calidad de víctima, Los segundos en su propio nombre y en calidad de hermanos legítimos, La tercera en su propio nombre y en calidad de madre legítima, La cuarta en su propio nombre y en calidad de compañera permanente de la víctima, y el menor en calidad de hijo extramatrimonial de la víctima; por medio del presente escrito de la manera más comedida me permito presentar ante su Despacho **DEMANDA EN ACCIÓN DE REPARACION DIRECTA**, en contra de **LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL**, por intermedio de sus representantes legales, o quienes hagan sus veces; fundamentándome en los hechos que narrare más adelante.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

DESIGNACION DE LAS PARTES:

Para el caso que nos ocupa las partes dentro de este trámite procesal son las siguientes:

DEMANDANTES:

Como partes demandantes al interior de este proceso actuaran las siguientes entidades:

CARLOS ARTURO, DEIBY, RUBY GRUESO SOLIS, CATALINA SOLIS CASTRO, NELCY RAMÍREZ CARDONA Y EL MENOR CARLOS MANUEL GRUESO RAMIREZ, todos mayores de edad, vecinos del Municipio de Tuluá Valle, identificados con las C.C.Nros. 1.112.299.385 de Tuluá Valle, 14.800.438 de Tuluá Valle, 1.116.232.177 de Tuluá Valle, 31.198.547 de Tuluá Valle y 1.116.258.202 de Tuluá Valle; quienes pueden ser notificados en la Calle 26C No. 11 – 10 del Barrio Bolívar del Municipio de Tuluá Valle, o en los teléfonos 3158260294 - 3108257962.

JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS, mayor de edad, residente en España, identificado con la C.C.No. 49.737.563 de Tuluá Valle, quien puede ser notificado a través del apoderado en la Calle 25 No. 26 - 42 del Barrio el Centro del Municipio de Tuluá valle, con teléfonos 3155055450 / 2321482; o por intermedio de sus familiares en la Calle 26C No. 11 – 10 del Barrio Bolívar del Municipio de Tuluá Valle, o en los teléfonos 3158260294 / 3108257962.

DEMANDADOS:

Como partes demandadas al interior de este proceso actuaran las siguientes entidades:

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, por intermedio de sus representantes legales, o quien haga sus veces; puede ser notificada en la Diagonal 22B No. 52 - 01 Ciudad Salitre Santafé de Bogotá D.C., o en el teléfono 5702000.

LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, por intermedio de sus representantes legales, o quien haga sus veces; puede ser notificada en la Calle 72 No. 7 - 96 de Bogotá D.C., o en el teléfono 3127011.

EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA POLICÍA NACIONAL, por intermedio de sus representantes legales, o quien haga sus veces; pueden ser notificados en la Transversal 45 No. 40 - 11 CAN de Santafé de Bogotá D.C.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

EN CALIDAD DE INTERVINIENTE:

Conforme a las normas vigentes y en calidad de intervinientes actuaran las siguientes entidades:

LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, por intermedio de su representante legal o quien haga sus veces; puede ser notificada en la Calle 7 No. 75 – 66 Piso 6 de Bogotá D.C, o en el teléfono 2558955.

EL MINISTERIO PÚBLICO, representado por La Procuraduría General de La Nación, a través de los Procuradores Delegados ante los Tribunales Contenciosos Administrativos; quien puede ser Notificado en la Carrera 9 No. 8 - 56, o en el teléfono 3908383.

PRETENCIONES:

1. Sírvasse Usted Señor **JUEZ CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE BUGA VALLE**, previo los trámites establecidos en La Ley, Declarar en sentencia que haga tránsito a cosa juzgada, Administrativamente responsable a **LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL**; por intermedio de sus Representantes Legales o quienes hagan sus veces, por el hecho de haber privado de la libertad de manera ilegal e injusta al señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, durante el periodo comprendido entre el 15 de Diciembre de 2.012 hasta el 29 de Octubre de 2.014; debido al actuar por fuera de la ley de los funcionarios adscritos a la Policía Nacional, al efectuar la captura de este sin ajustarse a la realidad de los hechos, como se probó al interior del proceso penal.
2. Que como efectos de lo anterior y previa liquidación de perjuicios tanto morales como materiales, se condene a **LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL**, y como efectos de lo anterior se cancelen los perjuicios tanto materiales como morales, que resulten probados al interior de este proceso a los señores **CARLOS ARTURO, DEIBY, RUBY, JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS, CATALINA SOLIS CASTRO, NELCY RAMÍREZ CARDONA Y CARLOS MANUEL GRUESO RAMIREZ**, todos mayores de edad, a excepción del ultimo, quien es menor y en el caso de este, se actúa, con fundamento en el poder conferido por sus progenitores los señores **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS Y NELCY RAMÍREZ CARDONA**, vecinos los tres primeros, Las dos últimas y el menor del Municipio de Tuluá Valle, El cuarto residente en España, identificados como aparece en los respectivos poderes, obrando El primero en su propio nombre y en calidad de víctima, Los segundos en su propio nombre y en calidad de

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

hermanos legítimos, La tercera en su propio nombre y en calidad de madre legítima, La cuarta en su propio nombre y en calidad de compañera permanente de la víctima, y el menor en calidad de hijo extramatrimonial de la víctima; perjuicios que según la información suministrada por los poderdantes y las pruebas que se aportan; los estimo de la siguiente manera.

PERJUICIOS:

Como es de conocimiento el artículo 90 de nuestra carta magna, consagra como principio constitucional, la responsabilidad extracontractual del estado, haciendo a este responsable patrimonialmente, por las conductas irregulares ejecutadas, por los agentes, ya sea por acción o por omisión, norma que para el caso que nos ocupa encuentra su desarrollo en el artículo 2341 y siguientes del C.C., a su vez los perjuicios tanto materiales, como morales, jurídicamente se encuentran reglamentados por las normas vigentes, en especial en el artículo 1613 y siguientes de la misma carta; siendo los primeros el daño emergente y el lucro cesante y los segundos los subjetivados y objetivados, por ello y para el caso que nos ocupa a continuación hago la siguiente liquidación:

PERJUICIOS MATERIALES:

DAÑO EMERGENTE: Que se refiere a los gastos que tuvo que tuvieron que sufragar mis mandantes y de los documentos que se aportan se desprende, que mi mandante debido a la ocurrencia de los hechos aquí narrados; incurrió en los siguientes gastos:

PAGO DE HONORARIOS:

Con el objetivo de ejercer la defensa técnica del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, de manera inicial se contrataron los servicios del Doctor **MIGUEL ANGEL BURITICA BLANDON**, quien se identifica con la C.C.No. 16.54.270 de Zarzal Valle, con T.P.No. 125.089 del C.S.J., a quien se le cancelaron por concepto de honorarios la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C. (\$3.500.000=)**.

Es de anotar que debido a inconvenientes que se presentaron con el profesional del derecho antes referido y debido a que el planteo fue la firma de un preacuerdo, comprometiendo la responsabilidad penal del encartado, recomendación que no fue aceptada ni por el inculpado, ni por sus familiares, hecho este que motivo que se contrataran los servicios, profesionales del suscrito **DAYRO PÉREZ BETANCURT**, mayor de edad vecino del Municipio de Tuluá Valle, identificado con la C.C.No. 16.352.267 de Tuluá Valle, por el valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/C (\$5.000.000=)**.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

PAGO DE HONORARIOS A INVESTIGADOR:

Que de igual manera para poder acceder a las pruebas que demostraran quien era el menor que se encontraba en el lugar de los hechos y que a la postre fuera quien portaba el arma y quien disparo la misma, la fecha en que tuvieron ocurrencia los hechos, se contrataron los servicios de un investigador, con el objetivo de establecer los siguientes aspectos, nombres completos, lugar de residencia, edad, donde se encontraba registrado y en caso de ser menor de edad, conseguir el Registro Civil de Nacimiento, actividad por la cual se pagó la sumas de **QUINIENTOS MIL PESOS M/C. (\$500.000=)**.

OTROS GASTOS:

Como se considera que el fallecimiento del padre del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, tuvo ocurrencia debido a las afecciones morales que le ocasiono dicho acontecimiento, se deberán de tener en cuenta, los gastos en que incurrió la familia, durante la etapa de su enfermedad y posterior entierro.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Estos gastos comprende los valores que tuvieron que sufragar los familiares del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, para visitar al señor **MARGARITO GRUESO OBREGON**, en la ciudad de Cali Valle, toda vez que este estuvo recluso en la Clínica Escensa, en cuidados intensivos, desde el 21 de Julio de 2.013 hasta el 07 de Septiembre de la misma anualidad, para un total de Cuarenta y Siete (47) días; periodo para el cual contrataron los servicios del señor **EDWIN ENRIQUE CASTAÑO LEON**, identificado con la C.C.No. 91.151386 de Tuluá valle, quien los transporto, en el vehículo de propiedad del señor **PEDRO PABLO ROJAS**, Marca **TWINGO**, de placas **BGS575**, durante el periodo ya referido, todos los días, a razón por **CIENTO CINCUENTAMIL PESOS M/C. (\$150.000=)**, por cada viaje, para un total de **SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/C (\$7.050.000=)**.

GASTOS DE ENTIERRO:

Como se desprende del Registro Civil de Defunción que se anexa el señor **MARGARITO GRUESO OBREGON**, padre del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, falleció el 08 de Septiembre de 2.013; y según concepto emitido por la Doctora **NOHORA ALICIA MUÑOZ CEBALLOS**, el hecho de que el último de los aquí nombrados hubiese sido privado de su libertad, trajo como efectos que su salud se deteriorara y posteriormente falleciera, y por

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

consiguiente se tuviera que incurrir en la honras fúnebres, las cuales tuvieron un costo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C. (\$2.200.000=)**.

LUCRO CESANTE: Estos perjuicios se refieren a los ingresos dejados de percibir por el señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, durante el periodo que estuvo privado de su libertad, periodo comprendido entre el 15 de Diciembre de 2.012 hasta el 29 de Octubre de 2.014; y como quiera que mi mandante no es una persona capacitada y se dedicaba a realizar actividades varias, liquidaremos este periodo con fundamento en los salarios mínimos vigentes para la época así: para el año 2.012 era del valor de **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/C (\$566.700=)**, para el 2.013 **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C (\$589.500=)**, para el 2.014 **SEISCIENTOS DIECISEIS MIL VENTISIETE PESOS M/C (\$616.027=)**, por consiguiente, a continuación se liquidaran los días dejados de laborar, por el resultado que de cada jornada de trabajo, teniendo en cuenta los salarios mínimos así:

2.013	15 días X 19.533=	\$ 292.995=
2.013	365 días X 19.633=	\$7.166.045=
2.014	332 días X 20.534=	<u>\$6.817.288=</u>
TOTAL		\$14.276.328=

Desprendiéndose del contenido del acápite anterior, que mi representado, dejo de percibir la suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C. (\$14.276.328=)**.

TOTAL DE PERJUICIOS MATERIALES:

De lo contenido en los acápites anteriores, se desprende que los perjuicios materiales ascienden a la suma de **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C (\$27.726.328=)**

PERJUICIOS MORALES:

Como quiera que según la jurisprudencia los perjuicios morales se deben de tasar en salarios mínimos legales mensuales y teniendo en cuenta la aflicción que sufrieron mis mandantes, los señores **CARLOS ARTURO, DEIBY, RUBY, JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS, CATALINA SOLIS CASTRO, NELCY RAMÍREZ CARDONA Y CARLOS MANUEL GRUESO RAMIREZ** que según el dictamen psicológico que se aporta estos se encuentran afectados en su psiquis, pues para el caso del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, no

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

solo se le privo de su libertad de manera injusta, sino que también producto de ello, no pudo cumplir de manera adecuada con sus obligaciones tanto morales como económicas con su compañera permanente y con su menor hijo, sino que también perdió a su señor padre, en cuanto a su señora madre y a sus hermanos, estos resultaron afectados moralmente, debido al hecho de ver a su hijo y hermano privado de la libertad de manera injusta y como efectos de ello, la pérdida de su esposo para la primera y padre para los segundos. Igual acontecimiento sucede con la señora **NELCY RAMÍREZ CARDONA**, compañera permanente del privado de la libertad de manera injusta. Por ello tasó estos o perjuicios en la cuantía de cuarenta salarios mínimos legales vigentes para cada uno de los afectados así.

CARLOS ARTURO GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
DEIBY GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
RUBY GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
CATALINA SOLIS CASTRO.	\$24.641.080=
NELCY RAMÍREZ CARDONA.	\$24.641.080=
CARLOS MANUEL GRUESO RAMÍREZ	<u>\$24.641.080=</u>
TOTAL	<u>\$172.487.560=</u>

De la liquidación anterior se desprende que los perjuicios morales ascienden a la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/C (\$172.487.560=)**.

TOTAL DE PERJUICIOS:

Del contenido de los acápites anteriores se desprende que el valor de los perjuicios tanto morales como materiales, ascienden a la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C (\$200.213.888=)**.

3. Que la condena que este Despacho determine mediante la respectiva sentencia; deberá de cumplirse conforme a los términos contenidos en el artículo 195 del C.C.A. y demás normas concordantes
4. En el evento de que **LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Y LA POLICÍA NACIONAL**, a través de sus representantes legales, se opongan a la demanda se condene en costas a estos.

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

5. Ordenar las demás actuaciones de Ley.

HECHOS:

1. Que el 15 de diciembre del año 2.012, el señor **CARLOS ARTURO, GRUESO SOLIS**, fue privado de la libertad, debido a que según lo manifestado por los policiales, El Subintendente **ALONSO CASTILLO** y los Patrulleros **JERSON PINTO HUMANEZ Y CRIISTIA CAMPO TROCHEZ Y DUBERNEY RINCÓN HERNANDEZ, TODOS MIMBROS DE LA Patrulla FUCUR**, quienes en el informe de Policía en casos de captura en flagrancia manifiestan lo siguiente ***“Siendo las 23:15 horas del día 12 de Diciembre de 2.012, la central de radio reporta un caso sobre un sujeto que se encuentra realizando disparos en la Carrera 11 con 26; nos dirigimos al lugar, observamos varios sujetos en la esquina, uno de ellos al notar la presencia Policial intenta huir del lugar, de inmediato lo interceptamos y al practicarle la requisa, se le halló en la pretina de la pantaloneta un (01) arma de fuego tipo: pistola, color: níquel, calibre: 7.65 con un cartucho en el proveedor, de inmediato se procedió a leerle los derechos del capturado. Es de anotar que en el andén de la residencia, ubicada en la Carrera 11 No. 26D, fue hallado una (01) vainilla calibre: 7.65; el sujeto antes en mención es traslado a las instalaciones del URI, para su respectiva judicialización, conoció caso patrulla 7-2 patrulleros JERSON PINTO HUMANEZ, CRISTIAN CAMPO TROCHOZ, patrulla Fucur 11-16 patrulleros DUBER RINCÓN HERNÁNDEZ, al mando del suscrito”***.
2. Que debido a lo narrado por los policiales, en el informe antes referido, mi representado, fue capturado, fundamentando los gendarmes, que dicha captura se había efectuado con fundamento en la figura de la flagrancia, reglamentada en el C.P: P., en su artículo 301.
3. Que debido a que el señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, fue capturado por los Policiales en flagrancia, se efectuaron las audiencias de garantías, tales como: **Legalización de Captura, Formulación de Imputación y Medida de Aseguramiento**, las cuales se materializaron el 16 de Diciembre de 2.012, por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de Garantías, imponiéndole Medida de Aseguramiento de detención preventiva en establecimiento Carcelario, medida que se cumplió en la Cárcel del Circuito de Tuluá Valle.

Mas no obstante lo anterior y de manera posterior a solicitud de la Defensa, el 27 de Diciembre de 2.012, se solicitó al mismo Despacho Judicial, la sustitución de la medida de aseguramiento de detentación preventiva en

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

establecimiento de reclusión, por la de Prisión Domiciliaria, la cual le fue concedida la misma fecha y que debió de cumplirse en el lugar de la residencia del encartado, ubicada en calle 26C No. 11-10 del barrio Bolívar del Municipio de Tuluá Valle.

4. Que la media de aseguramiento a que me he referido en el hecho anterior, estuvo vigente, durante el curso del proceso y hasta el 29 de Octubre de 2.014, fecha que luego de un trabajo realizado de por parte La Defensa, lográndose convencer, al ente Fiscal; para que con fundamento en las pruebas acopiadas, se solicitara y sustentara la figura de la Preclusión, en beneficio del encartado, solicitud que fue aceptada por el Operador de Justicia, en este caso el Juzgado Segundo Penal del Circuito, ordenando que se archivara de manera definitiva el proceso, y trayendo como efectos la libertad inmediata del encartado.
5. Que la preclusión se concede en beneficio del encartado, debido a que según las pruebas aportadas recaudadas por el ente Fiscal y en especial las Declaraciones rendidas por los señores **CATALINA SOLIS CASTRO, AURA MARÍA VASQUEZ MERCADO Y JHONATAN VARGAS FIGUEROA**, se pudo establecer que los policiales faltaron a la verdad al insertar en el informe las manifestaciones y que en ese lugar había otra persona, menor de edad para la época, que según las probanzas aportadas era el último de los mencionados y quien a la postre era la persona que portaba el arma de fuego, menor que también fue aprendido y quede manera negligente por parte de los policiales que intervinieron en el procedimiento, fuera dejado en libertad, sin vincularlo al proceso.
6. Que el señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, era hijo del señor **MARGARITO GRUESO OBREGON**, quien a su vez era el esposo de la señora **CATALINA SOLIS CASTRO**, y quien conformaba su grupo familiar con sus hermanos los señores **DEIBY, RUBY, JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS**; quienes según la crianza dada por sus progenitores, siempre ha sido una familia muy unida y comprometidos entre ellos, más que todo cuando se presentan esta clase de problemas.
7. Que para la época en que tuvieron ocurrencia los hechos, el señor **MARGARITO GRUESO OBREGON**, padre del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**; se encontraba delicado de salud, y debido al problema que se presentó con su hijo, su salud se deterioró, en tal sentido que no pudo superar el percance sufrido por su hijo, máxime si se tiene en cuenta, que él y su familia tenía la convicción de que este era inocente de los cargos que se le endilgaban.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

8. Que la privación ilegal del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, le rajo a este una serie de perjuicios tanto morales como materiales, los cuales pasare a relacionar a continuación:

PERJUICIOS:

Como es de conocimiento el artículo 90 de nuestra carta magna, consagra como principio constitucional, la responsabilidad extracontractual del estado, haciendo a este responsable patrimonialmente, por las conductas irregulares ejecutadas, por los agentes, ya sea por acción o por omisión, norma que para el caso que nos ocupa encuentra su desarrollo en el artículo 2341 y siguientes del C.C., a su vez los perjuicios tanto materiales, como morales, jurídicamente se encuentran reglamentados por las normas vigentes, en especial en el artículo 1613 y siguientes de la misma carta; siendo los primeros el daño emergente y el lucro cesante y los segundos los subjetivados y objetivados, por ello y para el caso que nos ocupa a continuación hago la siguiente liquidación:

PERJUICIOS MATERIALES:

DAÑO EMERGENTE: Que se refiere a los gastos que tuvo que tuvieron que sufragar mis mandantes y de los documentos que se aportan se desprende, que mi mandante debido a la ocurrencia de los hechos aquí narrados; incurrió en los siguientes gastos:

PAGO DE HONORARIOS:

Con el objetivo de ejercer la defensa técnica del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, de manera inicial se contrataron los servicios del Doctor **MIGUEL ANGEL BURITICA BLANDON**, quien se identifica con la C.C.No. 16.54.270 de Zarzal Valle, con T.P.No. 125.089 del C.S.J., a quien se le cancelaron por concepto de honorarios la suma de **TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/C. (\$3.500.000=)**.

Es de anotar que debido a inconvenientes que se presentaron con el profesional del derecho antes referido y debido a que el planteo fue la firma de un preacuerdo, comprometiendo la responsabilidad penal del encartado, recomendación que no fue aceptada ni por el inculpado, ni por sus familiares, hecho este que motivo que se contrataran los servicios, profesionales del suscrito **DAYRO PÉREZ BETANCURT**, mayor de edad vecino del Municipio

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

de Tuluá Valle, identificado con la C.C.No. 16.352.267 de Tuluá Valle, por el valor de **CINCO MILLONES DE PESOS M/C (\$5.000.000=)**.

PAGO DE HONORARIOS A INVESTIGADOR:

Que de igual manera para poder acceder a las pruebas que demostraran quien era el menor que se encontraba en el lugar de los hechos y que a la postre fuera quien portaba el arma y quien disparo la misma, la fecha en que tuvieron ocurrencia los hechos, se contrataron los servicios de un investigador, con el objetivo de establecer los siguientes aspectos, nombres completos, lugar de residencia, edad, donde se encontraba registrado y en caso de ser menor de edad, conseguir el Registro Civil de Nacimiento, actividad por la cual se pagó la sumas de **QUINIENTOS MIL PESOS M/C. (\$500.000=)**.

OTROS GASTOS:

Como se considera que el fallecimiento del padre del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, tuvo ocurrencia debido a las afecciones morales que le ocasiono dicho acontecimiento, se deberán de tener en cuenta, los gastos en que incurrió la familia, durante la etapa de su enfermedad y posterior entierro.

GASTOS DE TRANSPORTE:

Estos gastos comprende los valores que tuvieron que sufragar los familiares del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, para visitar al señor **MARGARITO GRUESO OBREGON**, en la ciudad de Cali Valle, toda vez que este estuvo recluido en la Clínica Escensa, en cuidados intensivos, desde el 21 de Julio de 2.013 hasta el 07 de Septiembre de la misma anualidad, para un total de Cuarenta y Siete (47) días; periodo para el cual contrataron los servicios del señor **EDWIN ENRIQUE CASTAÑO LEON**, identificado con la C.C.No. 91.151386 de Tuluá valle, quien los transporto, en el vehículo de propiedad del señor **PEDRO PABLO ROJAS**, Marca **TWINGO**, de placas **BGS575**, durante el periodo ya referido, todos los días, a razón por **CIENTO CINCUENTAMIL PESOS M/C. (\$150.000=)**, por cada viaje, para un total de **SIETE MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/C (\$7.050.000=)**.

GASTOS DE ENTIERRO:

Como se desprende del Registro Civil de Defunción que se anexa el señor **MARGARITO GRUESO OBREGON**, padre del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, falleció el 08 de Septiembre de 2.013; y según concepto

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

emitido por la Doctora **NOHORA ALICIA MUÑOZ CEBALLOS**, el hecho de que el último de los aquí nombrados hubiese sido privado de su libertad, trajo como efectos que su salud se deteriorara y posteriormente falleciera, y por consiguiente se tuviera que incurrir en la honras fúnebres, las cuales tuvieron un costo de **DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/C. (\$2.200.000=)**.

LUCRO CESANTE: Estos perjuicios se refieren a los ingresos dejados de percibir por el señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, durante el periodo que estuvo privado de su libertad, periodo comprendido entre el 15 de Diciembre de 2.012 hasta el 29 de Octubre de 2.014; y como quiera que mi mandante no es una persona capacitada y se dedicaba a realizar actividades varias, liquidaremos este periodo con fundamento en los salarios mínimos vigentes para la época así: para el año 2.012 era del valor de **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS PESOS M/C (\$566.700=)**, para el 2.013 **QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/C (\$589.500=)**, para el 2.014 **SEISCIENTOS DIECISEIS MIL VENTISIETE PESOS M/C (\$616.027=)**, por consiguiente, a continuación se liquidaran los días dejados de laborar, por el resultado que de cada jornada de trabajo, teniendo en cuenta los salarios mínimos así:

2.013	15 días X 19.533=	\$ 292.995=
2.013	365 días X 19.633=	\$7.166.045=
2.014	332 días X 20.534=	<u>\$6.817.288=</u>
TOTAL		\$14.276.328=

Desprendiéndose del contenido del acápite anterior, que mi representado, dejo de percibir la suma de **CATORCE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C. (\$14.276.328=)**.

TOTAL DE PERJUICIOS MATERIALES:

De lo contenido en los acápites anteriores, se desprende que los perjuicios materiales ascienden a la suma de **VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/C (\$27.726.328=)**

PERJUICIOS MORALES:

Como quiera que según la jurisprudencia los perjuicios morales se deben de tasar en salarios mínimos legales mensuales y teniendo en cuenta la aflicción que sufrieron mis mandantes, los señores **CARLOS ARTURO, DEIBY, RUBY, JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLIS, CATALINA SOLIS CASTRO, NELCY**

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

RAMÍREZ CARDONA Y CARLOS MANUEL GRUESO RAMIREZ que según el dictamen psicológico que se aporta estos se encuentran afectados en su psiquis, pues para el caso del señor **CARLOS ARTURO GRUESO SOLIS**, no solo se le privo de su libertad de manera injusta, sino que también producto de ello, no pudo cumplir de manera adecuada con sus obligaciones tanto morales como económicas con su compañera permanente y con su menor hijo, sino que también perdió a su señor padre, en cuanto a su señora madre y a sus hermanos, estos resultaron afectados moralmente, debido al hecho de ver a su hijo y hermano privado de la libertad de manera injusta y como efectos de ello, la pérdida de su esposo para la primera y padre para los segundos. Igual acontecimiento sucede con la señora **NELCY RAMÍREZ CARDONA**, compañera permanente del privado de la libertad de manera injusta. Por ello tasó estos o perjuicios en la cuantía de cuarenta salarios mínimos legales vigentes para cada uno de los afectados así.

CARLOS ARTURO GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
DEIBY GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
RUBY GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
JOSÉ ANTONIO GRUESO SOLÍS	\$24.641.080=
CATALINA SOLIS CASTRO.	\$24.641.080=
NELCY RAMÍREZ CARDONA.	\$24.641.080=
CARLOS MANUEL GRUESO RAMÍREZ	\$24.641.080=
TOTAL	\$172.487.560=

De la liquidación anterior se desprende que los perjuicios morales ascienden a la suma de **CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS M/C (\$172.487.560=)**.

TOTAL DE PERJUICIOS:

Del contenido de los acápites anteriores se desprende que el valor de los perjuicios tanto morales como materiales, ascienden a la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C (\$200.213.888=)**.

9. Que como se desprende del poder conferido mis mandantes bajo la gravedad del juramento, manifestaron que el año inmediatamente anterior, no estaban obligados a Declarar renta, por consiguiente no están obligados a cancelar el arancel judicial.

NORMA QUE SE CONSIDERA VULNERADA:

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

De conformidad con lo reglado en el artículo primero de La Constitución Nacional: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el **respeto de la dignidad humana**, en el trabajo y **la solidaridad de las personas que la integran** y en la prevalencia del interés general”. De la lectura de esta norma de carácter constitucional se desprende que el estado Colombiano es un estado social de derecho, y por ende todas las actuaciones de sus asociados, deben de enmarcarse dentro de lo reglado en la constitución y la Ley , enmarcadas dentro del respecto de la dignidad humana y la solidaridad de las personas que lo integran; y si bien es cierto las autoridades colombianas en este caso La Policía Nacional, a través de los gendarmes que realizaron las actuaciones iniciales, que de manera posterior originaron la captura, presuntamente en flagrancia de mi mandante, estos no se ajustaron a la realidad, al momento de insertar en los informes la reseña fáctica de lo realmente acontecido y responsabilizaron de unos hechos a este, que de conformidad a lo que se probara al interior del proceso, mi mandante no había cometido. Ahora si observamos el contenido del artículo segundo de la misma carta reza: “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. **Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares**”. De actuar de los policiales; se observa con claridad meridiana que esta norma también resulta violentada, pues no obstante la fecha de los hechos si se incauto una arma de fuego, también es cierto que de las pruebas aportadas para de manera posterior obtener la preclusión se desprende que los policiales faltaron a la verdad y dejaron en libertad a verdadero responsable del porte de armas quien para la época era menor de edad y se presume que el actuar de los policiales se efectuó debido a que para aprender al menor no se ajustaron a los protocolos establecidos en La ley de La Infancia y La Adolescencia, pues según información que se tiene este menor estuvo esposado por varias horas, entre otras irregularidades.

De otra parte el artículo 123 de la misma carta contempla: “Son servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. **Los servidores públicos están al servicio del Estado y de la**

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. La ley determinará el régimen aplicable a los particulares que temporalmente desempeñen funciones públicas y regulará su ejercicio”. Esta norma la debemos de concordar con el artículo sexto de la misma codificación contempla: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. **Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones**”. Del contenido de estas normas de carácter constitucional, observamos que las mismas se encuentra violentadas en el caso que nos ocupa, pues los servidores públicos, en este caso los policiales que participaron el operativo; haciendo caso omiso, con su actuar por fuera de la Ley, privaron de la libertad a mi Mandante y obsérvese que el artículo 28 de la misma carta contempla **“Toda persona es libre. Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. En ningún caso podrá haber detención, prisión ni arresto por deudas, ni penas y medidas de seguridad imprescriptibles.”** y si bien es cierto los procedimiento aparentemente se ajustaron a derecho, también es cierto que los miembros de la fuerza pública, que elaboran los informes, realizaron esta actividad sin ajustarse a Derecho, ocasionado que el encartado fuese privado de la libertad durante el periodo que se relacionó en los hechos. De lo anterior se desprende y de conformidad con lo reglado en el artículo 90 de la misma carta, el cual Establece: **“El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.** En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste. A renglón seguido el artículo 91: “En caso de infracción manifiesta de un precepto constitucional en detrimento de alguna persona, el mandato superior no exime de responsabilidad al agente que lo ejecuta. Los militares en servicio quedan exceptuados de esta disposición. Respecto de ellos, la responsabilidad recaerá únicamente en el superior que da la orden. A su turno el artículo 92 de la misma codificación estatuye: “Cualquier persona natural o jurídica podrá solicitar de la autoridad competente la aplicación de las sanciones penales o disciplinarias derivadas de la conducta de las autoridades públicas”. Desprendiéndose del contenido de las normas antes transcritas que el estado a través de los policiales que ejecutaron la captura de mi mandante, sin ajustarse a las normas vigentes y de manera posterior la Fiscalía, debido a su actuar negligente, por el hecho de no realizar las

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

investigaciones de manera rápida, al igual que la judicatura la cual solo casi a los dos años después fue que pudo resolver la figura de la preclusión en beneficio de mi mandante, ocasionaron estas entidades de manera injusta un privación ilegal de la libertad a mi representado.

PRUEBAS:

Con el objetivo probar los hechos narrados en esta Demanda, solito a Usted Decretar y tener como medios de prueba los siguientes:

TESTIMONIALES:

Con el objetivo probar los hechos narrados en esta Demanda, solito a Ustedes citar y hacer comparecer a su Despacho, a las personas que relaciono a continuación:

CATALINA SOLIS CASTRO, mayor de edad, vecina del Municipio de Tuluá Valle, identificada con la C.C.No. 31.198.547 de Tuluá Valle, quien puede ser notificada en la Calle 26C No. 11 – 10 del Barrio Bolívar, o a través de los teléfonos 3108257962.

NELCI RAMÍREZ CARDONA, mayor de edad, vecina del Municipio de Tuluá Valle, identificada con la C.C.No. 1.116.258.202de Tuluá Valle, quien puede ser notificada en la Calle 26C No. 11 – 10 del Barrio Bolívar, o a través de los teléfonos 3158260294.

AURA MARÍA VASQUEZ MERCADO, mayor de edad, vecina del Municipio de Tuluá Valle, identificada con la C.C.No. 31.641.294 de Buga Valle, quien puede ser notificada en la Carrera 11 No. 26C – 51 del Barrio Buenos Aires.

FABIO CESAR ROJAS COLORADO, mayor de edad, vecino del Municipio de Tuluá Valle, identificado con la C.C.No. 14.801.613 de Tuluá Valle, quien puede ser notificado en la Carrera 11 No. 26C – 12 del Barrio Bolívar.

A la Doctora **NOHORA ALICIA MUÑOZ CEBALLOS**, con el objetivo de que ratifique el contenido del Dictamen psicológico efectuó al señor **Carlos Arturo Grueso Solís**, que se anexa a la demanda; quien puede ser notificada en la Carrera 33 No. 25 – 39 del Barrio Alvernia del Municipio de Tuluá, o en el teléfono 2259696.

DOCUMENTALES:

Con el objetivo probar los hechos narrados en esta Demanda, solicito a Ustedes, tener como medios de pruebas los siguientes documentos:

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

- Constancia de agotamiento de la etapa prejudicial, efectuado por el Doctor **Eduardo Silva Orozco** Procurador 60 Judicial para asuntos Administrativos de Santiago de Cali Valle.
- Copia del Escrito de Acusación con sus respectivos anexos.
- Interrogatorio efectuado al señor **Jhonatan Vargas Figueroa**.
- Dictamen psicológico efectuó a los señores **Catalina Solís Castro, Carlos Arturo, Deiby, Ruby y José Antonio Grueso Solís**, por la Sicóloga **Nohora Alicia Muñoz Ceballos**.
- Contrato de prestación de servicios efectuado con el Doctor **Miguel Ángel Butirica Garzón**, el 16 de Diciembre de 2.012 con soporte de pago de Honorarios.
- Contrato de prestación de servicios efectuado con el suscrito, el 05 de Enero de 2.013 con soporte de pago de Honorarios.
- Recibos identificados con los No. 32922 y 32923 por las sumas de **DOSCIENTOS CINCUETA MIL PESOS M/C** cada uno, por concepto de pago de honorarios a la Sicóloga **Nohora Alicia Muñoz Ceballos**.
- Certificación de la Funeraria San Martin, con sus respectivos anexos.
- Dictamen psicológico efectuó al señor **Carlos Arturo Grueso Solís**, por la Sicóloga **Nohora Alicia Muñoz Ceballos**.
- Registro Civil de Matrimonio de los señores **Margarito Grueso Obregón y Catalina Solís Castro**.
- Registro Civil de Defunción del señor **Margarito Grueso Obregón**.
- Registro Civiles de Nacimiento de los señores **José Antonio, Deiby, Ruby, Carlos Arturo Grueso Solís** y del menor **Carlos Manuel Grueso Ramírez**.
- Certificación de transporte expedida por el señor **Edwin Enrique Castaño León**, con su respectivo soporte de documentos del vehículo en que se realizaron.
- Poderes para actuar.

PRUEBAS TRASLADADAS:

Como quiera que la investigación penal se tramita en La Fiscalía Novena Seccional del Municipio de Tuluá Valle, solicito al señor Juez se oficie a esta Fiscalía, para que remita con destino a este Despacho copia autentica de la totalidad de la carpeta, la cual figura con el Spoa **1872012-04096**.

Así mismo solicito se Oficie al Juzgado Segundo Penal de Circuito del Municipio de Tuluá Valle, para que remita con destino a este Despacho, copia autentica del expediente, radicado **2013-0003500**, y mediante el cual se dio trámite a la solicitud de preclusión, incluyendo las pruebas que se hicieron valer y la decisión que se tomó en su debida oportunidad.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

CADUCIDAD:

Del contenido del artículo 164, literal I del C.C.A. Se desprende que para esta clase de acciones, caducan en un término de dos años, los cuales deben de contarse desde el 30 de octubre del año 2014, un día siguiente a la fecha en que se precluyó el proceso penal, que se seguía en contra de mi mandante, por parte de La Fiscalía 9na. Delegada ante el Juez Segundo Penal del Circuito, con funciones de conocimiento y que es la fecha en la que tuvo conocimiento este de que había sido privado de manera injusta, por ello a la fecha, solo han transcurrido 12 meses, encontrado que la acción no está caduca.

REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD:

Conforme a lo establecido en el artículo 161 del C.C.A. en su numeral primero, se agoto esta etapa, y ello se desprende del contenido en el acta de audiencia efectuada el 16 de septiembre de 2015, expedida el Doctor **Eduardo Silva Orozco** Procurador 60 Judicial para asuntos Administrativos de Cali Valle, por el hecho de que la parte convocada no presentó ninguna fórmula de arreglo.

NOTIFICACIONES:

Las más las recibiré en la Calle 25 No. 26 – 42 Barrio el Centro del Municipio de Tuluá Valle, o en los teléfonos 2321482 o 315-5055450.

Los convocantes pueden ser notificados en la Calle 26C No. 11 – 10 del Barrio Bolívar del Municipio de Tuluá Valle, o en los teléfonos 3158260294 - 3108257962.

LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACION, por intermedio de sus representantes legales, puede ser notificada en la Diagonal 22B No. 52 - 01 Ciudad Salitre Santafé de Bogotá D.C., o en el teléfono 5702000.

LA RAMA JUDICIAL DIRECCION EJECUTIVA, por intermedio de sus representantes legales, puede ser notificada en la Calle 12 No. 7 – 65 de Santafé de Bogotá D.C., o en el teléfono 5658500.

EL MINISTERIO DE DEFENSA Y LA POLICÍA NACIONAL, por intermedio de sus representantes legales, puede ser notificado en la Transversal 45 No. 40 – 11 CAN de Santafé de Bogotá D.C.

LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO, por intermedio de su representante legal puede ser notificada en la Calle 7 No. 75 – 66 Piso 6 de Bogotá D.C, o en el teléfono 2558955.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com

DAYRO PEREZ BETANCURT
ABOGADO UNIVERSIDAD CENTRAL DEL VALLE
ESPECIALISTA EN DERECHO ADMINISTRATIVO
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

ANEXOS:

Me permito anexar al presente escrito, los documentos relacionados en el acápite de pruebas y los poderes para actuar.

CUANTIA:

Para efectos de este trámite estimo la cuantía superior a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues el valor del seguro asciende a la suma de **DOSCIENTOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/C (\$200.213.888=)**, más los intereses moratorios liquidados a la tasa más alta establecida por la Superintendencia Bancaria.

ACCIÓN A SEGUIR:

Se trata de una Demanda de Reparación Directa, regulada en el 140 del Código Contencioso Administrativo

COMPETENCIA:

Es Usted competente para conocer de este asunto, conforme a lo reglamentado en el artículo 156 del C.C.A. En su numeral sexto, pues las omisiones tuvieron ocurrencia en el Municipio de San Pedro Valle, territorio sobre el cual estos despachos Judiciales tienen Jurisdicción y por ende competencia para ello, a lo demás se suma la cuantía de las pretensiones.

DERECHOS:

Fundamento este escrito en el artículo 175 del C.C.A. y demás normas concordantes.

De usted atentamente;

DAYRO PÉREZ BETANCURT.

C.C.No. 16.352.267 de Tuluá Valle.

T.P.No. 66.386 del C.S.J.

Calle 25 No. 26 - 42 Tuluá Valle
Tel: 232 14 82 Cel: 315 505 54 50
Email: dayroperez_20@hotmail.com